

LA CONFLICTIVIDAD
SOCIAL EN LA
REGIÓN
AYACUCHO

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN

PERÚ CONVERSA



International
IDEA

Las publicaciones del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) son independientes de intereses específicos nacionales o políticos. Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las opiniones de IDEA Internacional, de su Junta Directiva ni de los Miembros de su Consejo.

Los mapas presentados en esta publicación no implican por parte del Instituto ningún juicio sobre el estatus legal de ningún territorio o la aprobación de sus fronteras, ni la ubicación o el tamaño de ningún país o territorio reflejan la visión política del Instituto. Los mapas se han creado para esta publicación con el fin de aportar claridad al texto.

Con la excepción de las imágenes y fotografías de terceros, la versión electrónica de esta publicación está disponible bajo licencia de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Se permite copiar, distribuir y transmitir esta publicación, así como usarla y adaptarla, siempre que sea únicamente para fines no comerciales, se reconozca adecuadamente la publicación y se distribuya bajo una licencia idéntica. Para obtener más información sobre esta licencia, consulte el sitio web de Creative Commons: <<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>>.

IDEA Internacional Perú

Av. Pardo y Aliaga 699, Oficina 601 B
San Isidro, Lima 15073
PERÚ
Teléfono: +511 3636098
Correo electrónico: info@idea.int
Sitio web: <<https://www.idea.int>>

IDEA Internacional

Strömsborg
SE-103 34 Estocolmo
SUECIA
Teléfono: +46 8 698 37 00
Correo electrónico: info@idea.int
Sitio web: <<https://www.idea.int>>

Dirección:

Pilar Tello, Oficial de Programas de IDEA Internacional
Emmy Dekker, Oficial de Programas Asociada de IDEA Internacional

Autor del documento original:

Omar Coronel Cuadros

Sistematización y resumen:

Manuel Enrique Rumiche Juarez

Concepto y diseño editorial

Ruperto Perez Albela Stuart

Diagramación

Lia Melisa Villacorta Bravo
Emma Angela Barrios Arrieta
Miguel Angel Carhuayo Oviedo

Este documento es un resumen del estudio realizado en 2024 por Omar Coronel Cuadros, encargado por el Instituto de Estudios Peruanos.



LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN LA **REGIÓN AYACUCHO**

DOCUMENTO DE REFLEXIÓN

8

1. EL ESCENARIO
ACTUAL

12

2. PRINCIPALES
ACTORES

15

3. PROBLEMAS
REGIONALES Y
LOCALES

17

4. CASOS DE
**CONFLICTO
SOCIAL**

30

5. ABORDAJES DE
LA CONFLICTIVIDAD
**SOCIAL EN LA
REGIÓN**

35

6. EXPECTATIVAS
DE LA
POBLACIÓN

36

7. HALLAZGOS Y
**REFLEXIONES
FINALES**

40

8. BIBLIOGRAFÍA

Ayacucho es un departamento que presenta diversos conflictos sociales, principalmente vinculados a temas socioambientales a los que le siguen los conflictos de tipo comunales. En los últimos años, el número de casos y protestas ha aumentado gradualmente, resaltando, entre estos últimos, el relacionado al ciclo de protestas políticas del 2022 que resultó en números heridos y fallecidos.

En ese contexto, el presente documento tiene como objetivo describir y explicar las causas, dinámicas, actores y consecuencias de la conflictividad social en la región Ayacucho entre 2016 y 2023 para ofrecer recomendaciones que encaucen el diálogo y estrategias de prevención.

La primera sección del informe plantea una revisión del escenario actual, proporcionando información sociodemográfica, cultural, económica y política de la región en los últimos años para entender el contexto de la conflictividad social actual. Luego, se analiza a los principales actores, destacando sus características, describiendo a los principales involucrados gubernamentales, sociales, y privados en la región, y discutiendo la variación de la presencia y dinámica de estos actores a nivel subregional. Además, se desarrollan las principales problemáticas regionales y locales principales que afectan la conflictividad presente y futura.

El informe también analiza brevemente la situación actual de la conflictividad social

en la región, mostrando los tipos de conflictos, su duración, el tipo de demandas, las medidas de protesta y el estado actual de los conflictos, entre otros aspectos. También se realiza el análisis de cuatro conflictos claves en la región: el conflicto en el sur (Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara), el conflicto en Huanta, el conflicto comunal en La Mar, y el conflicto político nacional en contra del gobierno de Dina Boluarte, que se desarrolló en forma particular en Ayacucho, especialmente en Huamanga. Se seleccionaron estos cuatro casos en base a dos criterios: representan los tipos de conflictividad más común en la región y son los casos que más preocupan a los funcionarios de prevención de conflictos sociales entrevistados. Se incluye también una revisión de las respuestas desde el Estado, las empresas y otros actores. Finalmente, se presentan las expectativas de la población, los principales hallazgos y reflexiones finales.

En cuanto a la metodología, se utilizaron tres tipos de fuentes. Primero, la base de datos de conflictos sociales y acciones colectivas de protesta de la Defensoría del Pueblo. Segundo, se realizaron una docena de entrevistas a funcionarios, dirigentes sociales y expertos, tanto de manera presencial como virtual. El trabajo de campo se llevó a cabo en Huamanga y Huanta en enero de 2024. Tercero, se consultaron fuentes secundarias como investigaciones, informes y notas periodísticas para complementar la información.



La región de Ayacucho se distingue por la prevalencia de economías ilegales y la desigualdad en la atención gubernamental, dividiéndose en tres bloques geográficos. El norte (Huanta, La Mar, Huamanga) está más conectado con el centro político en Huamanga y alberga provincias selváticas que forman parte del Valle del Río Apurímac, el Ene y el Mantaro (VRAEM). En esta zona predominan el cultivo de hoja de coca, el narcotráfico y los remanentes del grupo terrorista Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL). El sur (Sucre, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara) tiene vínculos económicos con Ica y Arequipa, y la actividad minera es un foco constante de protestas. La minería informal e ilegal se concentra aquí. Los proyectos de inversión del gobierno se centran en el norte y centro (Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huanca Sancos). Es relevante mencionar que el centro se destaca porque el 81.2% de su población se autoidentifica como Quechua.

Ayacucho también enfrenta altas tasas de pobreza y pobreza extrema, las cuales disminuyeron en 2021 tras la pandemia, pero aumentaron en 2022. La economía regional ha visto una disminución en la agricultura y ganadería, mientras que la extracción de recursos ha aumentado. El legado del Conflicto Armado Interno ha dejado desconfianza hacia el Estado y problemas estructurales.

En relación a la conflictividad social, Ayacucho ha sido escenario de prolongados conflictos, principalmente socioambientales, con casos activos durante varios años. La mayoría involucra a comunidades campesinas del



sur en oposición a empresas mineras, con demandas tanto ambientales como económicas. También existen conflictos relacionados con hidrocarburos y problemas comunales de delimitación territorial. Las protestas recientes se han centrado en temas ambientales, extractivos y de demarcación territorial, con un aumento en el uso de plantones y marchas como medidas de protesta.

Entre los actores sociales en la conflictividad destacan organizaciones de protesta como el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Ayacucho (Sutep-Ayacucho). Las organizaciones mediadoras incluyen la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCLCLP) y diversas ONG, mientras que la Iglesia Católica ha tenido un papel menos activo. Entre los actores estatales, están los municipios, el Gobierno

Regional de Ayacucho, ministerios y la Defensoría del Pueblo son cruciales. En el sector privado, la Cámara del Comercio de Ayacucho y compañías mineras como ARES y Apumayo son relevantes.

Para el abordaje de la conflictividad social el Estado ha creado el Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (Copregescon) para coordinar el monitoreo de conflictos sociales en la región. Este comité incluye la participación de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Sin embargo, su capacidad está limitada por la falta de recursos y la escasa participación civil. La Defensoría del Pueblo, con más experiencia y recursos, muestra una mejor comprensión de los conflictos y una mayor conexión con la comunidad. No obstante, el diálogo efectivo suele surgir solo bajo presión de las protestas.



EL ESCENARIO **ACTUAL**



Ayacucho puede entenderse como una región en tres grandes bloques geográficos. El primero es el norte con las provincias de Huanta, La Mar y Huamanga; el segundo, el centro con Cangallo, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo y Huanca Sancos; el tercero, el sur con Sucre, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Las provincias del norte son las más conectadas con el centro político, es decir Huamanga. Asimismo, las provincias selváticas de Huanta y La Mar, parte del Valle del Río Apurímac, el Ene y el Mantaro (VRAEM), constituyen un sub-bloque por su articulación comercial con los distritos de Pichari (provincia de Satipo, en la región Junín) y de Kimbiri (provincia de La Convención en la región Cusco). Esta es la zona más cocalera del país, donde sobreviven remanentes del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) bajo el nombre del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que operan como seguridad de narcotraficantes. Mientras tanto, las provincias del sur son las más alejadas del centro político con vínculos económicos más cercanos a los departamentos de Ica y Arequipa.

Por otro lado, la región cuenta con ocho cuencas hidrográficas principales según la Autoridad Nacional del Agua (ANA): Pampas, Mantaro Apurímac, Ocoña, Río Grande, Yauca, Acari y Chala. Se tiene también la Inter cuenca Santa Lucía y tres cuencas de áreas menores: Ene, Caravelí y Chaparra. Cuenta además con 25 cabeceras de cuenca. La protección de las cuencas del sur (Acari, Yauca, Ocoña, Chala, Chaparra y Caravelí) ha sido uno de los principales reclamos en las protestas del período analizado debido a la presencia de mineras formales en las cabeceras de estas cuencas y en las que también se ubican, cada vez más, la minería informal.

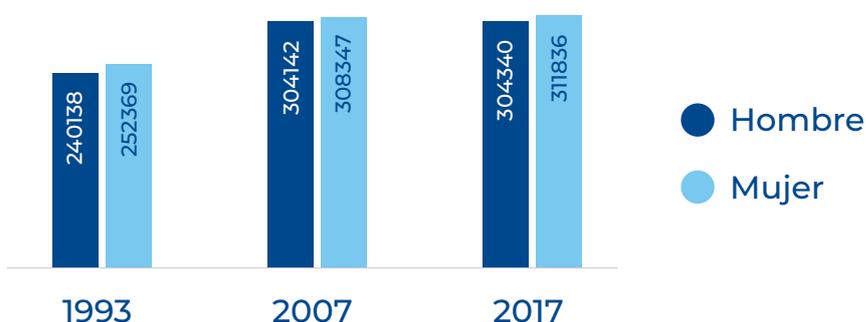
En términos de infraestructura vial, las principales rutas viales son (BCRP, 2022):

- Huancayo – Izcuchaca – Huancavelica – Pilpichaca – Vinchos – Ayacucho
- Ayacucho – Ococho – Andahuaylas – Abancay
- Quinua – San Francisco
- Pisco – Ayacucho - Valle Río Apurímac Ene y Mantaro
- Cangallo – Huancapi – Querobamba - Puquio y Nasca – Puquio – Abancay



En términos poblacionales, como se observa en la Gráfico N° 1, no ha habido un incremento relevante entre 2007 y 2017. Ayacucho es una de las regiones con mayor expulsión poblacional del país¹ (INEI, 2020). Esto en parte se debe a las carencias tanto de servicios públicos como de oferta privada en temas de educación y salud de calidad. Durante la pandemia hubo un pequeño flujo de retornantes desde Lima e Ica (Chávez, 2021).

Gráfico N° 1: Composición demográfica en la región Ayacucho
(Número)



Fuente: INEI (2000-2017). Elaboración propia.

Lo que llama la atención es que, en 2017, por primera vez, la población urbana superó a la población rural en la región. Esta migración interna da cuenta de un proceso de despoblación del campo similar al que se dio durante el Conflicto Armado Interno. Además, en términos de edades lo más notable es que entre 2007 y 2017 se ha reducido considerablemente la tasa de natalidad, con lo que se ha reducido la proporción de niños en la región.

Ayacucho, por otro lado, destaca por el alto porcentaje de población que se autoidentifica como Quechua. El 81.2% se autoidentificaba así en 2017, siendo Vilcas Huamán, Cangallo y Huanca Sancos, las provincias del centro, las que tienen la mayor autoidentificación Quechua. En contraste, quienes menos se identifican como quechuas están en Páucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas, las provincias del sur. Estas tres provincias son las únicas donde la autoidentificación como mestizos supera el 20% de la población.

Respecto a la economía, Ayacucho es una región con una alta tasa de pobreza y pobreza extrema. En la Gráfico N° 2 vemos que tanto la pobreza, como la pobreza extrema, se incrementan durante el 2020, año de la pandemia. Aunque ambas descienden notablemente en el 2021, pero vuelven a incrementarse en 2022. Particularmente la pobreza extrema vuelve a subir al 11%, nivel que no se veía desde 2015, con excepción del inicio de la pandemia en 2020.

1. En 2017, su saldo migratorio negativo fue el 34.6% de su población. Era la cuarta región con mayor expulsión de habitantes (INEI, 2020)

Gráfico N° 2: Incidencia de la pobreza en la región Ayacucho
(Número)



Fuente: INEI (2000-2017). Elaboración propia.

Asimismo, según el último informe del INEI, sobre la Evolución de la Pobreza Monetaria, 2014-2023, Ayacucho se presenta como uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza con 39.4% (a nivel nacional el promedio es 29%).

Sobre las principales actividades económicas, destacan dos sucesos interesantes. Primero, el decrecimiento de la importancia de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que pasó de 19.2% en 2007 a 12.6% en 2021. Esto refleja el paso de una sociedad mayoritariamente rural a una mayoritariamente urbana, como se indica líneas arriba. De otro lado, destaca que la extracción de petróleo, gas y minerales ha pasado de 12.7% en 2007 a 19.3% en 2021, el camino inverso a la agricultura y ganadería. Esto se vincula con el incremento de los conflictos socioambientales en la región. Hay que resaltar que, de acuerdo a los datos consultados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las actividades extractivas llegaron a un pico de 23% de la economía entre 2015 y 2019. El declive de 2020 y 2021 puede deberse a la pandemia.

En temas políticos, el período principal de conflictividad en Ayacucho se da en los ochenta y noventa, cuando el PCP-S le declara la guerra al Estado y se inicia el Conflicto Armado Interno. Este conflicto, que se prolongó por dos décadas y fue el más violento de la historia republicana, tiene su epicentro en la región de Ayacucho. Como señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), el 42.5% de las víctimas se dio en esta región, que además tuvo el mayor descenso poblacional de esos años debido a que un tercio de su población migró. Las provincias del norte y centro de la región (Huanta, Huamanga, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo) concentran la mayor cantidad de fallecidos del Conflicto Armado Interno.



Los legados del Conflicto Armado Interno persisten. El conflicto afectó tanto la estructura productiva como la legitimidad de las instituciones. A nivel social, la violencia tanto de las organizaciones subversivas como del uso arbitrario de la fuerza por parte de actores estatales destruyó el tejido social y ha generado daños psicológicos y emocionales (CVR, 2003). Casi un cuarto de siglo más tarde, esto sigue afectando la capacidad de las organizaciones sociales en la región. Además, en la dimensión de la cultura política, la experiencia con la violencia mantiene una actitud con el Estado marcada tanto por la desconfianza como por el miedo.

A pesar del desánimo con la representación política, en la primera vuelta de las elecciones del 2021, la mayoría en Ayacucho tuvo en Pedro Castillo a su candidato favorito. Con 52% en primera vuelta, Castillo dejó en un muy lejano segundo lugar a la otra opción de izquierda (Juntos por el Perú). El 82% de Castillo en segunda vuelta muestra también que, al menos en el momento electoral, se formó un vínculo importante con el candidato.

En el 2022, a nivel regional, también es llamativo que los dos primeros candidatos sumen más del 80% de votos válidos. Esas elecciones sugieren que hay una competencia relevante en la región y que las dos principales Gráficas de las elecciones, Wilfredo Oscorima y Pabel Bellido, tienen un arraigo importante en la región. Esto, sin embargo, contrasta con la fragilidad de sus organizaciones partidarias. Tanto el Movimiento Regional Wari Llaqta como el Movimiento Regional Agua dependen íntegramente del liderazgo de sus caudillos. Oscorima es un próspero empresario cangallino —en negocios de tragamonedas e inversiones inmobiliarias— que ya fue elegido gobernador en dos ocasiones previas, el 2010 (con Alianza para el Progreso) y el 2014 (con la Alianza Renace Ayacucho). Su segundo mandato estuvo interrumpido porque fue acusado y sentenciado a prisión por delitos contra la administración pública. Oscorima fugó, fue capturado y estuvo en prisión por casi 14 meses. En 2017 fue absuelto y retomó sus funciones como gobernador. Su nueva victoria en 2022, con el Movimiento Regional Wari Llaqta, muestra su importante capital electoral.

De acuerdo a Revilla, el éxito electoral de Oscorima se basa en su capacidad económica, que le habría permitido establecer estrategias de control y un efectivo cierre del juego político subnacional. El dinero ha sido un medio para sostener una campaña política de magnitud, mantener relaciones clientelares, comprar publicidad en medios locales, acercarse a autoridades judiciales y convencer a otros políticos regionales de sumarse a su movimiento (Revilla, 2021).

Finalmente, se destaca que el índice de corrupción puntúe más alto a las 3 provincias del norte, más cercanas al centro del poder político. Sin embargo, no parece haber correlación entre estos índices de corrupción y el número o intensidad de la conflictividad. Parinacochas, Lucanas y Páucar del Sara Sara, provincias con la misma cantidad de conflictos que Huamanga, aparecen con puntajes intermedios de corrupción. Páucar del Sara Sara, en particular, es una de las provincias con los puntajes más bajos de corrupción, pero es una de las que tiene más conflictividad.

PRINCIPALES **ACTORES**

2

Los principales actores de los conflictos en la región son las organizaciones que protestan, las organizaciones mediadoras de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, los actores del gobierno (nacional, regional y local), los actores del sistema judicial, la policía, y los actores del sector privado.

Entre los actores que protestan, hay una importante división entre las organizaciones de Huamanga, usualmente con más experiencia y conexiones con actores institucionales, y las organizaciones de las demás provincias.

En Huamanga están las organizaciones más antiguas, con experiencia y más burocracia interna. Entre ellas destacan el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Ayacucho (Sutep – Ayacucho), la Confederación General de Trabajadores del Perú – Sección Ayacucho (CGTP – Ayacucho), Asociación de Transportistas de Ayacucho, Federación de Estudiantes de la UNSCH (FUSCH), la Federación del Club de Madres de Ayacucho (Fedecma), la Federación de Mujeres Indígenas de Ayacucho (Feremia), la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), y la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre de 2022, entre otros.

Como señalan algunos de los entrevistados y la literatura académica que aborda la sociedad civil en Ayacucho (Crisóstomo, 2012; Quinteros, 2003; Zapata et al., 2008), varias de estas organizaciones (como el FREDEPA, la FADA, el SUTEP, la CGTP, la FUSCH) han sido históricamente, no solo reivindicativas, sino también políticas y con una marcada orientación de izquierda. Las tendencias dentro de la izquierda varían, inclusive dentro de cada organización. Los sectores más radicales están dentro del SUTEP regional, distanciado de Patria Roja. El FREDEPA tiene varias tendencias, pero incluye también sectores radicales vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización que reivindica al PCP-SL. De estas organizaciones, las más activas en el período estudiado han sido el SUTEP Ayacucho y el FREDEPA.

En provincias priman los frentes de defensa y comités de lucha a nivel provincial y distrital, las juntas de regantes, y las comunidades campesinas. Las juntas y las comunidades son

instituciones bastante arraigadas y disciplinadas que constituyen la base organizativa de las protestas más grandes y sostenidas. En contraste, salvo excepciones, los frentes y comités son organizaciones esporádicas, que pocas veces se mantienen a lo largo del tiempo; suelen depender más de liderazgos momentáneos. El conflicto socioambiental en Huanta refleja bien esta dinámica; los miembros de las juntas de regantes son quienes comenzaron y sostuvieron las movilizaciones, el frente de defensa local (Freddeh) no está institucionalizado y su capacidad depende de quiénes lo lideren.

Como en otras regiones, las organizaciones de distintas provincias no tienen capacidad para coordinar protestas regionales o campañas de protesta. Una excepción importante es el SUTE Ayacucho. Otra excepción sería el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Zona Sur de Ayacucho (FREDASUR), que ha logrado coordinar a dirigentes de distritos en tres provincias. Sin embargo, aún en este caso la coordinación es precaria, irregular en el tiempo y abarca solo algunos distritos, no articulan una representación de las tres provincias. Un caso más exitoso sería la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Fepavrae) que, en tanto gremial, ha tenido una organización y objetivos más definidos. Pero, al margen de estos casos, prevalece la fragmentación. En el caso de los conflictos en contra de la minería, no hay una organización regional con capacidad de coordinar acciones, pero existen dirigentes que se movilizan por la región difundiendo enfoques sobre los riesgos del extractivismo y plataformas de acción.

Del lado de organizaciones mediadoras de la sociedad civil, las principales también se ubican en Huamanga. Entre ellas destaca la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCL-CLP), que reúne a múltiples organizaciones de la sociedad civil y representantes del estado para discutir sobre proyectos regionales y prevenir la conflictividad. El Centro Loyola, la ONG Huñuq Mayu, la COMISEDH, COPARE/TAREA, SER, Wawa Kuna Manta, Asociación Kallpa, Chirapaq y la Cámara del Comercio, son otras de las organizaciones de la sociedad civil que también destacan en la región. Si bien es relevante también la Iglesia Católica, que en algunos momentos ha intervenido para facilitar el diálogo, todos los entrevistados concuerdan en que su presencia ha sido poco activa en los años que cubre este informe.

Del lado del Estado, los principales actores son los municipios distritales y provinciales, el Gobierno Regional de Ayacucho (GORE Ayacucho), las direcciones regionales, los ministerios (sobre todo el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)), la Oficina de Prevención de Conflictos del Gobierno Regional (OPC-GORE), la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-MINEM), la Prefectura Regional, la policía, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) junto a la Administración Local del Agua – Ayacucho (ALA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), y el Ministerio Público. Las instituciones más involucradas en la prevención del conflicto son la OPC-GORE, la Defensoría del Pueblo y la Prefectura.

Finalmente, entre los actores privados de la región, las principales organizaciones son la Cámara del Comercio de Ayacucho, la empresa Transportadora del Gas del Perú (TGP), y las compañías mineras que operan en la región. Un representante de la Cámara del Comercio nos indicó que, durante el ciclo de protesta política de 2022 y el conflicto político que siguió en 2023, los comerciantes de Huamanga asociados a la Cámara de Comercio se reunieron y decidieron rechazar los paros. La Cámara se ha reunido con organizaciones sociales para discutir el desarrollo económico de la región, pero manteniendo una distancia con las medidas que frenaban la economía. Representantes de oficinas de prevención de conflictos locales indicaron que la Cámara no ha tenido un rol en la coordinación para la prevención de conflictos. Un representante de la Prefectura indica que las empresas mineras gestionan sus conflictos independientemente, hasta que la contención escala. En contraste, TGP sí habría coordinado con oficinas, como la de la Defensoría.



Las principales minas en los conflictos sociales del sur de la región son las unidades mineras La Inmaculada y Pallancata (de oro y plata, a cargo de la compañía minera ARES, filial del Grupo Rothschild), Apumayo (de oro y plata, a cargo de la compañía minera Apumayo, Grupo Aruntani), y Breapampa (a cargo de la compañía South American Mining Investment -SAMI).

PROBLEMÁTICAS **REGIONALES Y LOCALES**

3



Un punto importante a resaltar son las economías ilegales en la región. De acuerdo al reporte 2023 de la Comisión Nacional Para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA, 2023), la superficie cultivada de hoja de coca pasó de 14 304 hectáreas en 2014 a 18 469 hectáreas en 2022, lo que la posiciona como la región con mayor cantidad de siembra. El impacto del valor bruto de producción de coca o del valor bruto del narco en la región. El último estudio ubicado data de 2012, e indicaba que la producción de coca y el narcotráfico representaban el 5.15% y 6.92% de la economía regional, respectivamente (García, 2013). De todas formas, la tendencia sugiere que el peso del cultivo de la coca y el narcotráfico se han incrementado en la última década, por lo que es esperable que su peso en el Producto Bruto Interno (PBI) regional también se haya elevado.

De otro lado, de acuerdo al economista Raúl Sayas, para 2021 había 15 mil mineros informales, de los cuales un bloque con equipo y maquinaria que no corresponde a pequeña minería o artesanal, estaría dentro de la ilegalidad (Lu, 2021). La minería informal e ilegal sobre todo ha crecido en las provincias del sur, como Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara (INGEMMET, 2017).

En relación a la Estado, los principales proyectos de inversión en 2023 muestran que la atención del gobierno nacional y regional está concentrada sobre todo en las provincias del norte y, en menor medida, del centro de la región. Las provincias del sur, por el contrario, no tienen mayores proyectos, a pesar de sus múltiples demandas. La desatención al sur responde a la desconexión económica de las provincias del norte y centro. A esto se suma que los líderes políticos de la región tampoco tienen mayor conexión con el sur. Esta desatención ayuda a contextualizar el descontento en las protestas socioambientales que han aumentado precisamente en el sur de la región

Asimismo, debe tenerse en cuenta las actitudes hacia la importancia de la democracia y la disonancia entre una valoración positiva de la democracia como garantía de respeto de derechos (más que el promedio nacional) y una mirada pesimista de la democracia como sistema que permite elegir autoridades (34% versus el promedio nacional de 58% según el INEI,

Encuesta Nacional de Hogares). Estos resultados se pueden interpretar como una experiencia o percepción positiva de la democracia en cuanto a defensa de derechos, en contraste con las dictaduras. Y, sin embargo, refleja también que la experiencia enseña que la democracia peruana no ha generado un sistema de representación valorado. La ciudadanía ayacuchana percibiría que el sistema actual impide que las opciones que prefieren salgan elegidas o siquiera entren en la competencia electoral. Esto se vincula con el consensuado diagnóstico del defectuoso sistema de representación peruano, donde no se tienen ni partidos consolidados, ni sistema de partidos, ni políticos profesionales (Barrenechea & Vergara, 2023).

En las entrevistas para este informe, algunos dirigentes resaltan que hay una distancia entre la “falsa” democracia actual y la “real” democracia, por la que se habría protestado en el conflicto social contra el gobierno de 2022-2023. Un dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) señala:

“No puedo dejar de pasar por desapercibido, por ejemplo, la detención de nuestros dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, a raíz del paro y de la movilización del 15 de diciembre del 2022, ¿no es cierto? En la que han muerto 10 compañeros, 10 ciudadanos luchadores, no porque eran revoltosos, oiga, no porque han hecho desmanes, este, en nuestra provincia, sino simplemente por haber reclamado una nueva constitución, que haya la defensa de la democracia, la auténtica democracia, Solamente por eso los han disparado el ejército, la policía, ¿no es cierto?” (AYCSOC2)

CASOS DE CONFLICTO SOCIAL

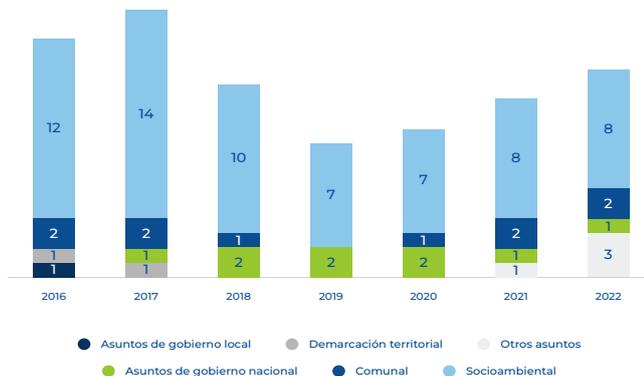
4



Como en la mayoría de las regiones del país, Ayacucho se ha caracterizado por la prevalencia y duración de los conflictos socioambientales. De acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2016 y 2022, la región tiene 30 conflictos sociales distintos. Los conflictos socioambientales tienden a mantenerse por más tiempo, activos o latentes, lo cual es una tendencia nacional. Dos de ellos están presentes durante los 7 años revisados en la base de datos, y 4 cuatro durante 6 años. Para diciembre de 2023, se tiene solo 9 conflictos en la región.

Como se puede ver en la Gráfico N° 3, los conflictos socioambientales han sido la gran mayoría cada año. En 2017 se llegó a un máximo de 14 conflictos socioambientales. La mayoría de estos conflictos son de comunidades campesinas en provincias del sur –Lucanas, Sucre y Páucar del Sara Sara– contra empresas mineras. En algunos casos la demanda es ambiental (pidiendo el retiro de la mina, o reparación de daños ambientales), y en otros económica (pidiendo compensaciones, trabajo o inversión). También hay algunos conflictos socioambientales por hidrocarburos, donde comunidades campesinas de Huamanga y La Mar exigen compensaciones a la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP).

Gráfico N° 3: Frecuencia de conflictos sociales acumulados en Ayacucho por tipo y por año (2016-2022) (Número)



Fuente: INEI (2000-2017). Elaboración propia.

En segundo lugar, se ubican los conflictos comunales por problemas en la definición de sus límites. Se trata de cuatro casos que han permanecido entre dos y tres años del período revisado. Tres de los casos se encuentran en provincias del sur (Sucre, Parinacochas y Páucar del Sara Sara) y uno en la zona central (Vilcashuamán). Todas se dan entre comunidades campesinas (son 8 comunidades campesinas enfrentadas), demandando una georreferenciación correcta para delimitar territorios donde se encontrarían recursos en disputa. En 2023, un nuevo caso se sumó en La Mar, entre las comunidades de Chiquintirca y Achihuay, debido a que la ruta del Gas de Camisea pasa por un territorio en disputa. El enfrentamiento dejó decenas de heridos y un fallecido, Gilmer Curo Borda, un joven de 24 años.

Aunque no aparece como tal en los informes de la Defensoría, funcionarios de la OPC-GORE destacan también que el acceso al agua es otro tema que enfrenta a comunidades.

En tercer lugar, están los conflictos por asuntos de gobierno nacional, con solo 3 casos que representan el 10% del total. El primero es la huelga de maestros, organizados por los SUTE regionales, que comenzó el 2017 y cada año se fue reanudando por períodos hasta el 2021. Reclamaban, principalmente, mejores salarios. El segundo es la movilización de los productores de papa de varias regiones, que demandan apoyo al gobierno nacional frente a la reducción del precio de sus productos. Finalmente, el tercero se refiere al conflicto por la crisis política iniciada con el intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo, en diciembre de 2022, que tuvo como uno de sus escenarios más importantes y fatídicos a la provincia de Huamanga en Ayacucho. Un sector de la ciudadanía rural y urbana se movilizó en todas las regiones del país en rechazo a la toma de mando de Dina Boluarte y a su alianza con el Congreso para mantenerse en el poder hasta el 2026. En Huamanga, la protesta fue creciendo hasta que, el 15 de diciembre de 2022, las Fuerzas Armadas respondieron desproporcionadamente a manifestantes y hasta transeúntes, con el saldo trágico de decenas de heridos y 10 ciudadanos fallecidos por impacto de proyectiles de arma de fuego.

En cuarto lugar, tenemos conflictos con “otros asuntos”, que con solo 3 casos también representan el 10% del total. El primero es el de la protesta de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, por problemas administrativos de su centro de estudios. El conflicto se inició en 2021 y fue resuelto en 2022. El segundo es la protesta de la Federación Universitaria de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que reclaman también por temas administrativos y limitaciones de los servicios educativos. Se sumó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) y hubo bloqueos y una paralización parcial de la ciudad. Este conflicto escaló rápidamente en octubre de 2022, con la quema de la puerta del rectorado de la universidad. Finalmente, el tercer caso es un conflicto entre la población de Huanta y la fiscalía provincial, por la liberación de los presuntos asesinos de un escolar. Este conflicto también tuvo un grave pico de violencia con la quema de la fiscalía y la agresión a sus funcionarios en diciembre de 2022.

En quinto lugar, ubicamos un solo conflicto por delimitación territorial, entre comunidades campesinas vecinas que pertenecen a Ayacucho y Huancavelica. Este conflicto entre las

comunidades de Carhuac Licapa -en Paras, Cangallo- y de Lillinta Ingahuasi -en Pilpichaca, Huaytará- fue retirado de la base de datos en 2017. La disputa territorial estuvo latente por décadas, a raíz de la creación de la provincia de Huaytará en 1984. Sin embargo, desde 2017, no se reportan eventos. No se ha solucionado, pero ha dejado de estar latente.

Finalmente, solo hay un conflicto por asuntos de gobierno local, que estuvo activo por pocos meses durante el 2016. La población de Huamanga protestó por la falta de transparencia en la construcción del Terrapuerto Plaza Wari S.A.C. El caso fue retirado en julio de 2016.

En términos territoriales, las provincias con más conflictos son Huamanga y las tres provincias del sur, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara (Ver Gráfico N° 4). Cada una de esas 4 provincias tiene 5 conflictos que se mantienen por varios años. De esos 20 conflictos, 17 son socioambientales.

Gráfico N° 4: Frecuencia de conflictos por tipo de ubicación territorial en Ayacucho (2016 - 2022) (Número)



Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración propia

Tomando en cuenta los datos de una muestra de eventos recientes de protestas (de febrero de 2020 a octubre de 2023) de la Defensoría del Pueblo, podemos tener una mirada más detallada de la variedad de las demandas recientes. El 28.4% de las demandas de esta muestra fueron por temas vinculados al medio ambiente y recursos naturales. Entre las principales demandas específicas destacan compensación por daños ambientales, el uso adecuado de recursos hídricos, la fiscalización ambiental, y la elaboración y mejora de instrumentos de gestión ambiental y participación ciudadana. En segundo lugar, y muy conectado, están las protestas relacionadas a industrias extractivas (16.4%). Ahí las principales demandas son la inversión en desarrollo, oposición a las actividades extractivas, y aprobación o modificación de convenios marcos o acuerdos. Ambas demandas se conectan con el incremento del canon durante el período analizado.

El tercer motivo central de las protestas en la región es la demarcación territorial, propiedad individual o colectiva (16.4%). Los principales reclamos son por contraprestación por uso de tierras comunales y solicitud de delimitación de linderos comunales. A este motivo le siguen los reclamos por apoyo económico y de gestión estatal frente a emergencias y desastres naturales (11.9%).

Finalmente, hay también demandas por servicios públicos (9%), procesos de diálogo en conflictos (7.5%), acceso a justicia o cuestionamiento de normas (3%), cumplimiento de acuerdos (3%), gestión pública (3%) y otros (1.5%).

Las demandas más recientes del ciclo de protesta política de 2022-2023, reclamaba los derechos civiles y políticos mínimos de una democracia: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, y al juicio justo, entre otros.

Es importante también prestar atención a los tipos de medidas usadas en las protestas. De las 440 medidas de protesta registradas, los plantones (36.6%) y las marchas (32.3%) son la mayoría. Los paros y huelgas suman otro 10%. Las acciones de protesta más disruptivas y hasta violentas suman cerca al 20%. Estas incluyen el bloqueo de vías (9.3%), la toma de locales (5.9%), los daños a la propiedad pública o privada (1.4%) y los enfrentamientos

La Gráfico N° 5 nos muestra la cantidad de heridos y fallecidos en conflictos sociales en 2021 y 2022. Entre 2016 y 2020, a pesar de que hay varios conflictos y protestas con distintos repertorios en la región, no se registran ni heridos ni fallecidos. El 2021 es el primer año del período estudiado en el que la Defensoría registra heridos civiles (10) en contextos de conflictividad. La confrontación se dio en el conflicto del Frente de Defensa del Sur contra la minería en Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Al año siguiente, la cifra de heridos y fallecidos se incrementa dramáticamente debido a un conflicto socioambiental, un conflicto contra el Ministerio Público, y al ciclo de protesta política nacional.

Gráfico N° 5: Número de heridos y fallecidos en conflictos sociales, por tipo de actor, en Ayacucho (2021-2022)
(Número)



Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración propia

Por otro lado, la Gráfico N° 6 muestra la tendencia regional de la conflictividad en un largo plazo (de 2006 a 2022). Como se observa, la dinámica de la conflictividad en Ayacucho, el número de conflictos se redujo en 50% entre el 2016 y el 2018. El número de conflictos solo se ha elevado el 2022.

Gráfico N° 6: Tendencia de Conflictos activos, latentes y resueltos en Ayacucho (2006-2022)
(Número)



Fuente: Defensoría del Pueblo. Elaboración propia

Hay que notar también que la proporción de conflictos activos en Ayacucho es mayor y se viene incrementando desde el 2018. La mayoría de los conflictos activos para el 2022 son socioambientales, y han estado activos por varios años. A estos se suman conflictos comunales, que también vienen de años y no encuentran respuestas eficaces del Estado. Finalmente están los conflictos nuevos. En Ayacucho han aparecido varios nuevos conflictos en 2022. Algunos de ellos, como el conflicto político con el gobierno o con la fiscalía en Huanta han pasado a ser latentes en 2023.



Ahora bien, los funcionarios y expertos entrevistados para este informe concuerdan en destacar cuatro conflictos centrales en los últimos años². Estos conflictos tienen diversos actores, causas y consecuencias. En esta sección, discutiremos cada caso con más detalle para ilustrar las dinámicas de contención más relevantes en la región.

2. Un representante de la oficina regional de la Asociación de Servicios Educativos Rurales y representantes de la Defensoría del Pueblo, la OPC-GORE y la Prefectura están de acuerdo en que estos cuatro conflictos están entre los que más les preocupan.

Conflicto socioambiental en el sur (Parinacochas-Lucanas-Páucar del Sara Sara)

El conflicto de las provincias del sur (Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara), representadas por sus frentes de defensa provinciales, contra las minas La Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa comenzó en octubre de 2019 en rechazo a su presencia en cabeceras de cuenca. Se exige no prolongar el cierre de las cuatro minas y que el ANA declare las cabeceras de las cuencas Chala, Chaparra, Atico y Caravelí como zonas intangibles (Cabral, 2021). Sin embargo, los antecedentes del conflicto datan de años anteriores.

Desde el 2012, tiempo en que comienzan a operar las cuatro minas, la población de las tres provincias exigió monitoreos de la calidad del agua de las cuencas afectadas. Un informe de Ojo Público da cuenta de que la ANA realizó 8 monitoreos entre 2012 y 2020. Entre 2017 y 2018, se detectaron altos niveles de metales pesados en aguas bajo la actividad de las cuatro minas (Cabral, 2021). Se halló trasgresiones a los estándares de calidad ambiental en las zonas de influencia de las cuatro minas.

La Diresa, en un estudio del 2019, detectó arsénico, aluminio y hierro en niveles superiores a los máximos permisibles en el agua de consumo humano del distrito de Chumpi (Parinacochas) y recomendó la clausura inmediata de las fuentes de agua con presencia del metal (Cabral, 2021). La contundencia del reporte habría activado el conflicto.

A partir del 2019, las juntas de regantes y los frentes de defensa de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara coordinaron para ejercer presión al gobierno local y nacional. Además de los actores del gobierno nacio-

nal, como son el gobernador Carlos Rúa, y los alcaldes municipales de las tres provincias. Las protestas comienzan con un paro de 72 horas en noviembre de 2019. Sin embargo, las acciones se frenaron en 2020 en el contexto de la pandemia. La presión se reinició en diciembre de ese año, cuando organizan un segundo paro de 72 horas exigiendo la presencia del presidente Francisco Sagasti en la mesa de diálogo (Yaranga, 2020).

Ante la falta de respuesta del Estado a las demandas de cumplimiento del cierre de las minas, los frentes de defensa organizaron un paro en octubre de 2021, que se dio con bloqueos de carretera, enfrentamientos y la toma de campamentos mineros de Apumayo y Breapampa. Se quemaron oficinas administrativas, talleres, vehículos y otras instalaciones (Aguilar, 2021). Como respuesta, la presidenta del consejo de ministros, Mirtha Vásquez, lideró una mesa de diálogo en la que se comprometió a negociar los plazos y términos del retiro y cierre de las cuatro unidades mineras³. El acuerdo se expuso en el acta de Cora Cora.

Representantes de la OPC-GORE recuerdan:

“Ingresaron a la Apumayo, el que atacaron la maquinaria, todo, ¿no? La consecuencia... se instauró la mesa de trabajo, la mesa de diálogo y se vio, pues, el tema. O sea, ahí hay unos compromisos que ya que se estaban haciendo.” (AYCUB2)

Sin embargo, el gobierno retrocedió y dejó abierta la posibilidad de que las mineras puedan solicitar prórrogas de sus operaciones.

3. Este es textualmente el primer acuerdo del Acta de Coracora. Se puede ver el acta completa en el reportaje de Anuska Buenaluque para Epicentro (Buenaluque, 2021).

El gobierno tuvo que rectificar para evitar vulnerar la seguridad jurídica porque existe una normativa para los planes de cierre y sus modificaciones, el gobierno no puede cerrarlas unilateralmente. En enero de 2022, los frentes de defensa del sur organizaron otra movilización exigiendo que se cumplan los acuerdos del acta de Cora Cora en máximo 90 días. No obstante, luego de este evento, el conflicto entró en latencia. Parece haber un desgaste en la dirigencia. Representantes de la Defensoría y la OPC-GORE señalan que esto muestra la fragilidad de los frentes de defensa del sur, que dependen de liderazgos intermitentes. Sin embargo, un representante de la Defensoría advierte que el conflicto está vigente y podría reactivarse en cualquier momento:

“Me animo a pensar que el sur del de Ayacucho está todavía sentado pacientemente, No sé por qué la paciencia, pero está todavía pacientemente esperando alguna respuesta. Podría allí de pronto tenerse una reactivación y escalamiento rápido del conflicto social.” (AYCDP1)



Conflicto socioambiental en Huanta

Un segundo conflicto clave en la región, también socioambiental, se da en Huanta contra una pequeña mina en la comunidad de Parccora (distrito de Chaca) y contra cateos mineros en inmediaciones de las lagunas del Razuhuilca (de las empresas Newmont Perú S.R.L y Puma Ñahui Exploraciones Perú S.A.C). En este caso se rechaza la exploración o explotación minera en la cabecera de cuenca ubicada en el Razuhuilca y en otras cabeceras de cuenca de la provincia; el detonante fue la difusión de la actividad minera en Chaca y los cateos mineros cerca de las lagunas del Razuhuilca.

Si bien existía una tensión hace años, el conflicto ingresa a la base de datos de la Defensoría del Pueblo recién en 2023 cuando se difundió la actividad minera en Chaca (de los propios comuneros de la zona) y cateos cerca de las lagunas del Razuhuilca. Dos organizaciones, el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta (Freddeh) y la Asociación de Regantes, demandaron tanto el cierre de la mina de Parccora como la intangibilidad de la microcuenca del Razuhuilca. En septiembre, el diálogo con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM-Ayacucho)⁴ quedó truncado porque el Freddeh no aceptó la propuesta de plantear condiciones para la explotación minera en Paccora.

Desde octubre, los dirigentes de la Asociación de Regantes anuncian que la explotación minera en el Razuhuilca ya ha comenzado y que la ciudad de Huanta podría quedarse sin agua. Comienzan las primeras protestas. A

esto, se sumó la constatación de la reducción del cauce de los ríos, que se comienza a vincular con la actividad minera. Funcionarios de la OPC-GORE, siguiendo la información de la DREM-Ayacucho, sostienen que la sequía favoreció la alarma contra la minería:

“Huanta sostenía, sí o sí, [la minería] va a contaminar. Con el tiempo... argumentos que no se ajustaban a la realidad. Sin embargo, a esto se suma la naturaleza, ¿no? Muchos me han contado que han subido a la laguna y esta se ha secado. Y peor, pues, este pequeño río que bajaba al valle de Huanta ya se ha secado, ¿no? Entonces, eso ha sido el argumento para que le indiquen a la mina, pues.” (AYCGUB2)

Sin una solución convincente, en noviembre del 2023 la protesta escaló con un contundente paro provincial de tres días y fue un éxito rotundo. Más de 3 mil ciudadanos se movilizaron y se paralizó por completo la ciudad.

Como consecuencia de la movilización, el GORE Ayacucho junto a la Defensoría y otras instituciones⁵ se comprometieron a gestionar con el ANA la intangibilidad de la microcuenca del Razuhuilca u otro medio de conservación. Igualmente, ofrecieron revisar el expediente de autorización de la actividad minera en Chaca. Más adelante se acordó también que la ANA continúe con la identificación, delimitación y zonificación de la cuenca del Mantaro, que incluye al Razuhuilca.

4. Además de la DREM-Ayacucho, que era el principal interlocutor, también participaron la Dirección Regional de Medio Ambiente (DRA-Ayacucho), la ANA, el GORE, la Defensoría, la PNP, el Ministerio del Interior, el Municipio Provincial de Huanta y los municipios distritales de Chaca, Luricocha e Iguain.

5. En la reunión en Huamanga del 15 de noviembre, participaron también la Prefectura y la PNP. Los manifestantes viajaron a la capital de la provincia para exigir una reunión con el GORE.

Hay que destacar que otra consecuencia de este conflicto socioambiental es un conflicto entre la población de la provincia, debido a que no todos están en contra de la minería. Los comuneros de Chaca, donde está la mina de Parccora, y la contigua Uchuraccay están a favor de la actividad minera. Comuneros de Chaca y Uchuraccay trabajan en las minas, y otros también son los dueños. Por ello, desde la reactivación del conflicto, han defendido su derecho a la explotación minera y sus solicitudes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los comuneros de Chaca y Uchuraccay argumentan que debido a las crecientes limitaciones de la producción agrícola en su territorio no tienen mejor alternativa que la minería. En ese sentido, el conflicto con Huanta está latente.



Conflicto comunal entre comunidades de Chiquintirca y Anchiuay

El tercer conflicto clave es comunal, aunque también de demarcación territorial, entre las comunidades de Chiquintirca (distrito de Anco) y Anchiuay (distrito de Anchiuay), provincia de La Mar. Este también Gráfico en la Defensoría del Pueblo como un conflicto nuevo, del 2023, pero hace años que ambas comunidades tienen también un conflicto socioambiental con la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El conflicto es por compensaciones por la construcción del gaseoducto por donde pasa el Gas de Camisea, y también por soluciones a contaminación ambiental en medio de esa construcción. El detonante es la falta de respuesta del Estado a la disputa por la demarcación; la ausencia de actores estatales que mediaran eficazmente la disputa generó el incentivo para resolverlo al margen del Estado y de forma violenta. El conflicto comunal por los límites y linderos de las comunidades se superpone sobre el conflicto socioambiental previo, lo cual refleja una dinámica común de la complejidad de la conflictividad en el país. Ambas comunidades están disputándose los posibles beneficios o reparaciones de TGP. El mortal enfrentamiento entre comuneros en septiembre de 2023 es una muestra del nivel de violencia al que pueden llegar los relativamente invisibilizados conflictos de este tipo en el país.

La Defensoría del Pueblo registra un conflicto socioambiental entre la comunidad de Chiquintirca y la TGP por lo menos desde septiembre de 2017. La comunidad exige la

revisión del contrato entre el gobierno y la comunidad, la indemnización por los terrenos afectados por la construcción del gaseoducto, por el daño ambiental y por la contaminación sonora del helipuerto, la reubicación de viviendas cerca del gaseoducto y la masificación del gas en la zona. La base de datos lo califica como un conflicto latente desde entonces, aunque en proceso de diálogo⁶.

En septiembre de 2023, la Defensoría del Pueblo ya tenía claro que el conflicto podía escalar y se contactó con la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscalía y centros de salud para que estén alertas. Sin embargo, las comunidades tuvieron su más duro enfrentamiento el 14 del mismo mes, con un comunero fallecido -Gilmer Curo Borda, de 24 años- y 46 heridos.

Los días siguientes hubo reuniones con todos los actores involucrados, incluidos el GORE Ayacucho y los municipios de las comunidades, donde se acordó reactivar la mesa de diálogo, que las comunidades presenten solicitudes a la Dirección Regional de Agricultura y que se reúnan en la Dirección Regional de Trabajo -edificio donde está la OPC-GORE- para fijar una fecha para el levantamiento definitivo del territorio comunal. En noviembre se acordó que las instituciones correspondientes realicen el trabajo de delimitación en la zona de disputa en diciembre, y que las comunidades no realicen actividades en la zona de disputa mientras dure el trabajo de campo. Sin embargo, a la fecha, aún no hay muchos avances.



6. En este conflicto también son actores la Municipalidad Distrital de Anco, la Municipalidad Provincial de La Mar, la OGGs-MINEM, el MINAM, la SGSD-PCM, la Defensoría y el GORE Ayacucho.

Conflicto político contra el gobierno

Finalmente, el conflicto político en rechazo al gobierno de Dina Boluarte es visto por varios entrevistados como una “bomba de tiempo”. El ciclo de protesta política nacional de diciembre de 2022 tuvo diversos actores con distintas motivaciones y objetivos. El primer bloque en movilizarse fueron seguidores de Pedro Castillo, que protestaron contra lo que leían como un golpe de Estado a su presidente. Se rechazaba como ilegítima la toma del poder por una alianza entre Dina Boluarte y la oposición más radical a Castillo en el Congreso. De otro lado, también protestaron sectores opuestos tanto a Castillo como a la alianza de Boluarte y el Congreso. Simplificando, para el primer grupo la demanda era el cierre del Congreso, la reposición de Castillo, y la Asamblea Constituyente, mientras que para el segundo era la renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones (O. Coronel, 2023).

Las numerosas acciones de violencia se dieron luego de los manifestantes fallecidos en las inmediaciones del aeropuerto. Es en reacción a esa noticia que en la misma tarde del jueves 15 de diciembre se incendian dos sedes del Ministerio Público en el distrito de Andrés Avelino Cáceres, en Huamanga. Y es luego de que se confirmara que había 10 víctimas, que el viernes 16 se dan más actos violentos, como la quema de instalaciones del Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Hubo también destrozos y saqueo en una tienda de Movistar.

Luego de estos eventos y la detención de los dirigentes del Fredepa, la protesta contra el nuevo gobierno decae en la región. Entre diciembre de 2022 y abril de 2023, solo 6% (103 eventos) del ciclo de protesta política nacional se da en Ayacucho (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, s. f.). A pesar de esto, el representante de la Cámara del Comercio calculó pérdidas de 15 millones de soles al día en diciembre de 2022, y de 10 a 12 millones de soles al día, en enero, especialmente en el sector turismo y agroindustrial (RPP, 2023). Indagados por los motivos del descenso en las movilizaciones, funcionarios del OPC-GORE destacan los legados de la violencia política en Ayacucho, el temor a mayor costo económico para la región, y la ausencia de liderazgos.

A estas explicaciones, representantes del Fredepa añaden la detención de los dirigentes del Frente -acusados de terrorismo-, las divisiones de las organizaciones sociales, y la limitación de tener un gobernador aliado de la presidenta Boluarte.

Los funcionarios de la Defensoría, Prefectura Regional y la OPC-GORE están de acuerdo en que, aunque el conflicto político está disipado estos meses, no significa que no pueda volver a escalar.

Para finalizar esta sección, presentamos una tabla resumen con las principales causas inmediatas, mediatas, estructurales y las principales consecuencias de los cuatro conflictos emblemáticos expuestos:

Tabla 1. Causas y consecuencias de los 4 conflictos analizados

Conflicto	Causa Inmediata	Causa Mediata	Causa Estructural	Consecuencia
Conflicto socioambiental del sur	Confirmación (con informe de Diresa 2019) y difusión de la contaminación del agua de consumo humano con metales pesados	Desconfianza en el Estado cercano a empresariado minero Falta de experiencia de dirigentes (maximalismo) Acuerdos incumplidos Ausencia de Ley de Ordenamiento Territorial (OT) y una zonificación ecológica y económica (ZEE) que permita definir las cabeceras de cuenca donde no pueda darse la explotación minera Interés de expulsar a la minería formal para abrir más espacio a las minerías no formales, en la que algunos manifestantes podrían estar involucrados	Contexto de alta pobreza Modelo de desarrollo que no se preocupa por los costos locales del extractivismo	Fiscalización inicial para supervisar la contaminación Mesa de Diálogo Cada mes de paralización de Apumayo equivale a una pérdida de 5 millones de soles para el fisco
Conflicto socioambiental de Huanta	Difusión en radios de los cateos mineros en las lagunas del Razuhuilca activan el rechazo a la exploración o explotación minera en las cabeceras de cuenca de la provincia por temor a la contaminación y desabastecimiento de agua Rechazo a Ocorima, que denigra a los manifestantes y se ve como un aliado del gobierno de Boluarte y de la minería.	Estrés hídrico que los campesinos del valle de Huanta sufren hace años Experiencias negativas como las de Conga, Tía María o Las Bambas refuerzan la percepción de que la minería es una fuente de tensiones sociales Inseguridad alimentaria, el alza de precio de los productos y la recesión. Ausencia de un marco legal específico, de voluntad y de capacidad estatal para zonificar los territorios donde se puede explotar la minería.	Contexto de pobreza donde persiste un modelo de desarrollo y democracia que no toma en serio las preocupaciones o desconfianzas de la ciudadanía Fragmentación económica y social que facilita la desconfianza y tensión entre comunidades contiguas	El GORE junto a la Defensoría y otras instituciones se comprometieron a (1) gestionar con la ANA la intangibilidad de la microcuenca del Razuhuilca u otro medio de conservación, (2) a revisar el expediente de autorización de la actividad minera en Chaca, y (3) que la ANA continúe con la identificación, delimitación y zonificación de la cuenca del Mantaro Conflicto entre población urbana y rural de Huanta con los comuneros de Chaca y Uchuraccay, que están a favor de la minería
Conflicto comunal en La Mar	Falta de respuesta efectiva del Estado sobre la demarcación territorial, entre las comunidades de Chiquintirca (distrito de Anco) y Anchihuay (distrito de Anchihuay), provincia de La Mar. Disputa por compensaciones por la construcción del gasoducto por donde pasa el Gas de Camisea, y por soluciones a contaminación ambiental en medio de esa construcción	Desinterés estatal en clarificar la georeferenciación en zonas rurales Falta de recursos para un Equipo Técnico Especializado (ETE) que haga un diagnóstico, coordine con las comunidades y realice el trabajo de campo. Respuesta del GORE y luego la conformación de este equipo demoran demasiado	Comunidades campesinas e indígenas no son priorizadas porque se evalúan como menos importantes electoral y económicamente.	46 heridos y un fallecido Mesa de trabajo para avanzar con la georeferenciación
Conflicto político 2022-2023	Rechazo a la vacancia y detención de Pedro Castillo y al gobierno de la coalición de Dina Boluarte Rechazo a la represión en Andahuaylas Rechazo a la represión que dejó 10 ayacuchanos fallecidos	Demanda por representación efectiva Defensa de la representación descriptiva/sociológica de Castillo Defensa del programa que implicaba la presidencia de Castillo	Racismo, clasismo y centralismo tanto en el gobierno como en la sociedad civil (sobre todo en Lima)	10 fallecidos y 79 heridos Formación de Asociación de los Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre Pérdidas de 15 millones de soles al día en diciembre, y de 10 a 12 millones por día en enero, en turismo y agroindustria Bono para familiares de fallecidos y para heridos

Tendencia de los conflictos

En este contexto y, en base a las entrevistas a funcionarios, dirigentes sociales y expertos para este informe, y de las tendencias observadas en datos de la Defensoría, se puede señalar que es importante prestarle atención a los conflictos socioambientales y comunales en la región. Los entrevistados concuerdan en que la conflictividad en contra de la minería formal en el sur (Lucanas-Parinacochas-Páucar del Sara Sara) y la minería formal e informal en el norte (Huanta) podría reactivarse en cualquier momento. Sobre todo, en el sur, donde existe una probada contaminación del agua.

Hay que tomar también en cuenta el contexto político: el rechazo al gobierno nacional de Boluarte y regional de Ocorima de parte de algunas organizaciones puede tener un impacto en la forma en que se da el conflicto. Se pueden mezclar las demandas en contra de la contaminación, del extractivismo y del gobierno regional y nacional que se perciben como aliados de estas empresas. En parte, eso es lo que ocurrió en el conflicto socioambiental en Huanta.

También debe tenerse en cuenta la tensión entre comunidades a favor del desarrollo de la minería y comunidades en contra de esta

actividad, formales o informales, que hasta el momento se da solo en Huanta. Con el incremento de la minería informal e ilegal en el sur de Ayacucho, la conflictividad en esa zona podría complejizarse.

Finalmente, un ex representante de la Defensoría advierte también que no hay que perder de vista las organizaciones ilegales en el VRAEM, que pueden aprovechar el contexto de inseguridad ciudadana para fortalecerse.

“En el tema del VRAEM ... hay que tener mucho cuidado con lo que viene ocurriendo allí. Hablamos de una población pujante que está tratando de quitarse de encima el estigma de que es zona roja, de narcotráfico, porque es una población que está dedicada ahora a otras actividades, el cacao, la palta, el café, entre otras tantas. Los motiva a salir de ese estigma. Sin embargo, todavía en varios lugares, es zona de alto tráfico de drogas, en la cual están conviviendo buenas y malas intenciones. Y el fenómeno de inseguridad ciudadana, crimen organizado que se está viviendo tiene un enorme caldo de cultivo que podría en el VRAE asentarse, ¿no? Si es que no lo está ya.” (AYCDP1)



ABORDAJES DE LA CONFLICTIVIDAD **SOCIAL DE LA REGIÓN**

5



En 2019, varias instituciones estatales formaron el Comité Regional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales (Copregescon), para coordinar el monitoreo a conflictos latentes y activos una vez al mes. El Copregescon está presidido por el prefecto regional, asesorado por la Dirección de Prevención de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del MININTER y donde también participan la Defensoría del Pueblo, la OPC-GORE, y las direcciones, ministerios o instituciones temáticas que puedan ser útiles para conflictos específicos.

La Oficina de Prevención de Conflictos del Gobierno Regional, OPC-GORE, tiene pocos recursos; funciona en una pequeña oficina en la azotea de la Dirección Regional del Trabajo. No tienen vehículos propios, dependen de la voluntad de otras oficinas del GORE Ayacucho. Se encargan de monitorear los conflictos y viajar para conversar con los actores para contactarlos con oficinas que pueden avanzar sus demandas. Hacen seguimiento a compromisos, pero no tienen mucha capacidad para presionar avances.

El CRPC Copregescon no cuenta con la presencia constante de organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, representantes de la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCLCLP) participan esporádicamente. Miembros de la OPC-GORE parecen desconocer su presencia y solo coordinan con gerencias del GORE:

“De 1995 al 2000 tenía fuerza, pues, ¿no?, las mesas de concertación. Sí, pero ahora ya no hay, no tiene no hay ninguna. Nosotros articulamos con el mismo gobierno regional. Con la Gerencia de Recursos Naturales, de Transporte, de Salud cuando hay casos de salud, ¿no?” (AYCUB2)

Algunas organizaciones sociales son contactadas cuando se sabe que va a haber alguna movilización. Un representante de la Prefectura Regional da un ejemplo:

“El Fredepa hace poco tuvo ya su cambio de dirigentes. Con la gestión anterior también hemos trabajado muy de la mano en los paros en las manifestaciones que ellos convocaron. Siempre hemos conversado antes, un par de días antes de la manifestación, de la convocatoria. Por supuesto, indicándoles que la Constitución respalda el derecho... pero también invitándolos a que ellos hagan su manifestación respetando los derechos de las otras personas, que respeten la propiedad privada, la propiedad pública. Inclusive hemos logrado crear un [grupo de] WhatsApp específicamente para ese evento, ¿no?, con los dirigentes y las autoridades. Ahí está la policía, la alcaldía, la Defensoría del Pueblo, la Prefectura y los dirigentes” (AYCGUB1)

Sin embargo, tanto la Prefectura Regional como la OPC-GORE destacan la limitación de los recursos con los que cuentan, lo que hace que estén más concentrados en los conflictos del norte de Ayacucho (Huamanga, Huanta y La Mar). El Prefecto nos indicó que, en un año de gestión, no ha podido viajar al sur, donde están los principales conflictos socioambientales. Señaló que las provincias del sur tienen más contacto con Ica y Arequipa. Representantes de la OPC-GORE también dan cuenta de los desafíos que enfrentan:

“Sería bueno generar presupuesto para las regiones, porque nosotros somos áreas de conflictos sociales y hay un recorte presupuestado en todos los gobiernos regionales. Entonces los del ejecutivo priorizan donde hay obra, pero para para nuestra área, por favor, ¿no? ... de la parte social. Hoy no tenemos un vehículo, tenemos que estar tocando puertas (...) Estamos en un sexto piso y atendemos al público alojados en una Dirección Regional (...) Esta oficina funcionó con un proyecto. Pero nos quitaron” (AYCGUB2)

Es importante resaltar que la cita nos da pistas para explicar la dinámica de conflictos donde no hay grandes demandas de inversión. Ahí el Estado presta menos recursos y, en consecuencia, se hace más complicado atenderlos para los funcionarios. Miembros de la misma oficina recuerdan momentos en los que no son priorizados por el GORE Ayacucho y han expuesto su seguridad para cumplir sus funciones:

“Ya habíamos programado esa reunión para el 19, como sea, llueve o truene, así, para ya hacer trabajo de campo. Y lo comprometimos al área de catastro y todo su equipo. Entonces, llegó el día, solicitamos camioneta y para ir, y ‘no hay’. Lo que yo tenía que hacer es buscar combi. Viajé en la noche a las doce de la noche, viajamos, Y tenía que llegar, pues, hasta un distrito que es San Antonio. Y de San Antonio para ir a Chiquintirca, pues hay tres comunidades intermedias, y tenía que buscar una moto lineal para que me traslade hasta la otra comunidad.” (AYCGUB2)

La agencia estatal con más experiencia y recursos, en comparación, es la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, esta institución cuenta con cuatro oficinas ubicadas estratégicamente

en la región: la central en Huamanga, y los módulos de Huanta, Pichari en el Vraem y Puquio en el sur. De las entrevistas, queda claro también que los funcionarios de la Defensoría del Pueblo conocen más a fondo la dinámica de los conflictos y están más compenetrados con la sociedad civil. En los casos analizados, es notorio, por ejemplo, cómo en el caso del conflicto socioambiental en Huanta, el representante del módulo defensorial de Huanta valida más las preocupaciones de la sociedad civil frente a la minería que los funcionarios de la OPC-GORE. Esta oficina tiene una mirada que se basa en que el principal problema es la falta de comunicación apropiada, perspectiva que tiende a no valorar adecuadamente los temores y desconfianzas de la población.

“Tienen que comunicar, ¿no? O sea, comunicar y ser más transparentes en la información, porque esa información no llega a la población, a la comunidad, y ya lo tergiversan las situaciones. No la fluida comunicación o correcta comunicación. Ya se va con otra información a las bases y ellos toman eso como una medida de lucha” (AYCGUB2)

De todas formas, si bien hay nuevos esfuerzos valiosos para coordinar la prevención de conflictos en la región, ubicamos aún dos desafíos centrales: primero, a todos los actores institucionales les faltan recursos para poder cumplir adecuadamente sus funciones; y segundo, es necesario que estos espacios institucionalicen la participación de la sociedad civil en la discusión sobre la prevención de conflictos.

Más allá de los logros y limitaciones que nos reportan las oficinas de prevención de conflictos, es importante conocer qué piensan los dirigentes sociales, quienes son los que exigen el diálogo para poder avanzar sus demandas. Como en otras regiones del país, la experiencia de varios dirigentes es que el diálogo no se da realmente en una etapa de prevención del conflicto, sino como resultado de la presión a través de la protesta. Y luego, rara vez ese diálogo llega a resultados concretos, lo que acumula más frustración. Un representante del Fredepa señala:

“Se logra el diálogo solamente cuando el pueblo se moviliza, cuando el pueblo toma las ciudades, cuando hay conflicto, ¿no? Esas mesas de diálogo se operan en ese momento. En Ayacucho tenemos mesas de diálogos para un determinado tema con el gobierno regional, por ejemplo, para el tema salud que te contaba, ¿no? Del hospital. Y ya hubo una mesa para el trabajo ambulatorio de los mercados, para el transporte hay una mesa, pero no tiene frutos, no tiene resultados. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, creo que tiene que reorientarse, rediseñarse, reorientarse estos espacios de diálogo.” (AYCSOC1)

A pesar de esta mirada crítica, otro representante del Fredepa reconoce que la Defensoría del Pueblo, en particular, sí ha sido útil para el seguimiento a acuerdos en espacios de diálogo. Esto, en contraste con otras instituciones como la Fiscalía de Prevención de Delitos:

“La Defensoría del Pueblo sí ha cumplido, de alguna forma, el papel de mediador, el papel de, digamos, de hacer el seguimiento a los reclamos que hemos hecho, En esa parte la Defensoría sí ha cumplido. Pero con respecto a la fiscalía de prevención de delitos, hemos tenido reuniones, conversaciones, recomendaciones, cuando nosotros convocamos a paralizaciones o movilizaciones (...) Con motivo de todas las movilizaciones siempre firmamos un documento, ¿no? Ofreciendo de que no va a haber ningún disturbio, no va a haber violencia, no va a haber daño a las propiedades privadas ni públicas, etcétera, ¿no? Solo con ese motivo siempre se nos han acercado los de la Fiscalía de Prevención de Delitos.” (AYCSOC2)

Como en otras partes del país, prima la percepción de que el diálogo tiene resultados muy magros debido al desinterés del Estado. Si bien se reconoce algunas instituciones con algo de utilidad, como la Defensoría del Pueblo, la desconfianza es la actitud por defecto hacia el Estado. Esta desconfianza se ha incrementado en el contexto del ciclo de protesta política de 2022-2023. Una dirigente del Comité de Lucha nos refería que, cuando fueron reprimidos en la llamada “Toma de Lima”, los manifestantes heridos tenían temor de ir a los hospitales y también a la propia Defensoría del Pueblo. “Con la Defensoría también había temor” recuerda la dirigente entrevistada.

En relación a las empresas, estas han tenido estrategias diferenciadas para responder a la conflictividad. Algunas como TGP coordinan de forma permanente con agencias de prevención de conflictos estatales, mientras otras, como las compañías mineras del sur, deciden gestionar la conflictividad de forma privada, acudiendo al Estado solo cuando el conflicto ya ha escalado.

En tanto la capacidad para el diálogo de las organizaciones sociales varía en la región. Las organizaciones más institucionalizadas, de trayectoria, tienen mayor experiencia y capacidad de dialogar. De otro lado, las organizaciones más nuevas, con liderazgos con menos experiencia suelen ser menos propensas al diálogo. El primer tipo de organizaciones se concentra en Huamanga, mientras que el segundo tipo es que más prevalece en las otras provincias.

De otro lado, la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza (MCLCP), que fue bastante relevante en la primera década post transición a la democracia, se ha ido debilitando y perdiendo su capacidad representativa.

Las iglesias y ONG no han tenido un rol relevante en la construcción de espacios de diálogo durante el período estudiado. De otro lado, los medios de comunicación locales han servido, usualmente, como caja de resonancia de las consignas de las protestas locales. En los casos desarrollados, el conflicto en Huanta es emblemático para analizar los efectos que

pueden tener las radios y televisoras locales para difundir una narrativa muy clara sobre la contaminación (J. Coronel, 2023).

Finalmente, un exrepresentante de la Defensoría resalta lo importante que son la seriedad y responsabilidad de dirigentes sociales, empresarios, y funcionarios a la hora de entablar el diálogo. Demandas maximalistas o inflexibilidades insensatas generan tensiones innecesarias y muchas veces limitan el inicio de una negociación real. Los efectos de los conflictos dependen mucho de esta capacidad del diálogo tanto en la sociedad como en el sector privado y el Estado:

“Los efectos de los acuerdos tomados en conflictos sociales tienen mucho que ver con la seriedad y responsabilidad con la que actúan, tanto sus dirigentes sociales como los representantes del empresariado o del estado. Si vamos a ir a engañarnos, y como dirigente, yo voy a comerme ese engaño, porque quiero decirle al pueblo, ‘lo hemos logrado, no se preocupen, pero recuerden votar por mí luego’; o si como gente del estado digo, ‘bueno, los engaño, nos comemos este engaño porque finalmente yo ya me voy, que sea el problema del siguiente’, entonces, son malos acuerdos, ¿no? Creo que los efectos de un conflicto social a nivel de acuerdos solamente van a ser oportunos y viables en la medida que sean diligencias responsables y entidades estatales con representantes responsables. Ahora bien, los efectos secundarios que nos alcanzan a todos tienen que ver con temas de estancamiento de turismo, tienen que ver con temas de estancamiento, desarrollo económico.” (AYCDP1)



EXPECTATIVAS DE LA **POBLACIÓN**

6



Para la ciudadanía de Ayacucho, imaginar su departamento en tres años despertó sensaciones de preocupación e incertidumbre. Sin embargo, a largo plazo, en un horizonte de quince años, la proyección pasa a generar esperanza, aunque acompañada de inquietud.

En cuanto a las expectativas de cambios positivos en aspectos como la democracia, la política, el acceso a la justicia en derechos humanos, el acceso a la salud, la educación y la economía, un 83% responde con una actitud de cambios positivos moderados, mientras que solo un 17% presenta una actitud de baja o muy baja posibilidad de lograr cambios. Esto indica que las personas en Ayacucho mantienen una actitud positiva, con esperanza o expectativas de que, en algunos años, se obtengan mejoras en ámbitos importantes para su región.

En cuanto a los aspectos que esperan se priorice antes de las próximas elecciones, se mencionan medidas para enfrentar la recesión económica y pobreza, así como la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. A pesar de esto, no creen que ocurran reformas que mejoren la calidad de la democracia antes del 2026.

HALLAZGOS Y **REFLEXIONES FINALES**

7



Entre 2016 y 2022, hubo 30 conflictos sociales en Ayacucho. Como a nivel nacional, la gran mayoría son conflictos socioambientales. Los conflictos comunales son el segundo tipo de conflictos más recurrentes. Ambos conflictos son difíciles de gestionar efectivamente o resolver, por lo que son también los más duraderos. Entre 2019 y 2022 se incrementó el número de conflictos en la región debido a nuevos conflictos comunales y de otro tipo (como conflictos contra el Ministerio Público en Huanta, de los estudiantes contra la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y por la toma de mando de la presidenta Dina Boluarte). Asimismo, las provincias con mayor número de conflictos son Huamanga, Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. Las tres últimas están ubicadas al sur de la región, donde funcionarios de las oficinas de prevención de conflictos reportan tener menos capacidad para llegar debido a falta de recursos propios.



Las principales causas inmediatas de los conflictos en la región son: la contaminación o temor a la contaminación de fuentes de agua en cabeceras de cuenca debido a la minería, el temor a la escasez de agua debido a la minería, la falta de georreferenciación para zanjar discrepancias en delimitación de tierras comunales, entre otras.



Las principales medidas de protesta en el período estudiado son las marchas y los plantones. En 2022, debido al ciclo de protesta política, se incrementaron medidas antes marginales, como el bloqueo de vías y la toma de entidades. Asimismo, entre 2016 y 2020 no hubo ni heridos ni fallecidos en conflictos sociales en

Ayacucho. Sin embargo, entre 2021 y 2022, hubo 91 civiles y 26 policías heridos, y 10 civiles fallecidos. Este incremento se da fundamentalmente en 2022, a raíz del ciclo de protesta política.



La proliferación de la minería informal en el sur de Ayacucho puede generar más daño ambiental y futuros escenarios de conflictividad entre comunidades en contra de todo tipo de minería y comunidades involucradas en minería informal o ilegal. Un ejemplo de esto último es el conflicto en contra de la minera formal e informal en Huanta, que ha unificado a la población urbana y rural del distrito de Huanta, pero también la oposición dura de los distritos de Chaca y Uchuraccay, donde las comunidades explotan la minería. Este es un conflicto inicialmente socioambiental que puede generar un conflicto comunal, o entre comunidades y población urbana.



Los conflictos comunales en la región tienen larga data, pero se activan rápidamente cuando los territorios en disputa pueden ser una rápida fuente de recursos. Por ejemplo, el conflicto comunal entre las comunidades de Chiquintirca y Anchiway, en La Mar, se activó por un anexo por donde pasa el Gas de Camisea y que implicaría la posibilidad de compensaciones de la empresa TGP. Hay casos potencialmente similares en el sur de la región.



Las organizaciones sociales de la región varían en su capacidad y experiencia. El centralismo se reproduce a nivel regional, y Huamanga congrega a la mayoría de organizaciones sociales históricas, como el Fredepa, la Fada, el Sutep, etc. Salvo excepciones, como el Sutep, la mayoría de estas organizaciones no tiene muchas conexiones con otras provincias (más con el norte -Huanta y La Mar- que con el sur). Las organizaciones sociales fuera de Huamanga tienen menos experiencia y capacidad tanto para sostener las protestas como para gestionar y monitorear acuerdos. Asimismo, Las organizaciones perciben que el diálogo, muchas veces, no tiene resultados. Esto debido a que luego de iniciales mesas de diálogo, no se llegan a cumplir acuerdos y se dilatan las respuestas del Estado.



El ciclo de protesta política en contra del gobierno de Dina Boluarte, ha generado una nueva organización de víctimas y un fuerte rechazo de un sector de la población tanto al gobierno nacional como al gobierno regional, que se percibe aliado de la presidenta. Los entrevistados indican que el decrecimiento de las protestas políticas en la región se debe a la detención de los dirigentes del Fredepa, el apoyo del gobernador al gobierno de Boluarte, y la división de los objetivos y estrategias de las organizaciones. Se menciona también que la memoria de la violencia política, reactivada por la cruenta represión, es también un factor. Finalmente, funcionarios del estado advierten que este conflicto podría reactivarse también, dependiendo del contexto político.



La conflictividad ha tenido como consecuencias algunas respuestas del Estado, costos económicos y sociales, y la formación de nuevas organizaciones. Entre las respuestas están la formación de mesas de diálogo, mesas de trabajo y un mayor trabajo fiscalizador de algunas agencias estatales. Entre los costos económicos están los 5 millones de soles mensuales que se perdieron durante el cierre de la mina Apumayo (Tecnología Minera, 2021) y los 15 millones de soles diarios de pérdidas que se calculan durante el ciclo de protestas políticas de diciembre de 2022 (RPP, 2023). Como costos sociales están los heridos y fallecidos, y también la formación de nuevos conflictos, como conflictos comunales a raíz de conflictos socioambientales. Finalmente, se han formado también nuevas organizaciones, como la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre.

Reflexiones finales:

- El gobierno nacional (MINAM, MINEM y ANA) debe atender las demandas de los conflictos socioambientales utilizando los instrumentos legales que ya existen (como la Ley de Recursos Hídricos). A mediano plazo, es necesario aprobar una Ley Ordenamiento Territorial (OT) con zonificación ecológica económica (ZEE). El MINEM, MINAM y ANA también deben cooperar para el diseño de la formalización de la minería. El ordenamiento territorial debe darse en paralelo a la inversión en la formalización de la minería pequeña y artesanal, y la fiscalización de la minería ilegal.
- El gobierno nacional (la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, adscrita a la PCM) debe brindar más recursos a las oficinas encargadas de la delimitación territorial y capacitar a gestores de conflictos a nivel regional para institucionalizar un camino claro y eficaz de resolución de conflictos de linderos.
- El gobierno nacional (PCM) debe brindar más recursos a la Prefectura Regional y a la OPC-GORE para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Especialmente la OPC-GORE requiere un mejor espacio para recibir a los ciudadanos, más personal, y un vehículo.
- Se debe fomentar la mayor articulación de organizaciones de la sociedad civil en Ayacucho. Es necesario fortalecer espacios de encuentro entre organizaciones de la sociedad civil. Aquí, creemos que es importante que el gobierno nacional (PCM).
- Es necesario un mayor acompañamiento y apoyo a la Asociación de Familiares de Aseginados y Heridos del 15 de diciembre de parte del MINJUSDH y el Ministerio Público. Es necesario apoyar en la difusión de los casos y presión para que avance la investigación. Una lección del Conflicto Armado Interno es que las instituciones se legitiman cuando atienden a las víctimas. Esto ayudaría a reconstruir la confianza en el Estado.



BIBLIOGRAFÍA

8

Aguilar, R. (2021). Así fue la invasión y la quema de la mina de oro Apumayo en Ayacucho [CRÓNICA] Minem PCM Breapampa | PERU | EL COMERCIO PERÚ. El Comercio. <https://elcomercio.pe/peru/asi-fue-la-invasion-y-la-quema-de-la-mina-de-oro-apumayo-en-ayacucho-cronica-minem-pcm-breapampa-noticia/>

Barboza Quiroz, K. (2023, enero 25). Fiscal sostiene que Fredepa difundía lineamientos de Sendero Luminoso. El Comercio. <https://elcomercio.pe/politica/justicia/sf-fiscal-sostiene-que-frente-de-defensa-de-ayacucho-difundia-lineamientos-agitacion-y-propaganda-de-sendero-luminoso-noticia/#clearly>

Barrenechea, R., & Vergara, A. (2023). Peru: The Danger of Powerless Democracy [Perú: El Peligro de una Democracia sin Poder]. Journal of Democracy, 34(2), 77-89. DOI: <https://doi.org/10.1353/jod.2023.0015>

BCRP. (2022). CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Buenaluque, A. (2021, noviembre 21). Palabra y firma de Mirtha: La premier y Ayacucho. Epicentro TV. <https://epicentro.tv/palabra-y-firma-de-mirtha-vasquez/>

Cabral, E. (2021, noviembre 28). Demandas postergadas: La historia detrás de la última crisis minera en Ayacucho. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/3195/demandas-postergadas-la-recente-crisis-minera-ayacucho>

Chávez, R. (2021, diciembre 12). Migrar para sobrevivir: En pandemia 250.000 peruanos retornaron a zonas rurales de origen. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/3199/casi-250000-peruanos-retornaron-pandemia-zonas-rurales>

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2022). Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3664/2019. <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstmourju%2F14z6o8I4G3YTJPLNTEH3S5U%2Bml%2FfvP4XGRO%2BsvKfn-8GmpaPOSd%2FmkmOWvm5yJGJz3zHt%2BZKqmu9ZVqN6thD3krLFCYiakvm1KgLw6y-nH0KkXCncgGqB1gww%3D%3D>

Coronel, J. (2023). La marcha antiminera en Huanta. Reunión del Centro Loyola, Huamanga, Perú.

Coronel, O. (2023, abril 11). Ni revolución ni barbarie: ¿por qué protestan en Perú? Nueva Sociedad. <https://nuso.org/articulo/304-revolucion-barbarie-protestas-peru/>

Correo. (2018). Narcotráfico moviliza el 70% de la economía ayacuchana. Correo. <https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/narcotrafico-moviliza-el-70-de-la-economia-ayacuchana-857504/?ref=dcr>

Crisóstomo, M. (2012). Legítimos y radicales. Una aproximación al estudio del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. FONDO EDITORIAL PUCP. https://www.elvirrey.com/libro/legitimos-y-radicales-una-aproximacion-al-estudio-del-frente-de-defensa-del-pueblo-de-ayacucho_97981

CVR. (2003). Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. CVR.

De Echave, J. (2023, noviembre 23). ¿Qué está pasando en Ayacucho? CooperAcción. <https://cooperaccion.org.pe/opinion/que-esta-pasando-en-ayacucho/>, <https://cooperaccion.org.pe/opinion/que-esta-pasando-en-ayacucho/>

Degregori, C. I. (2018). EL SURGIMIENTO DE SENDERO LUMINOSO. AYACUCHO 1969-1979.. OBRAS ESCOGIDAS VII. IEP. https://www.libreriasur.com.pe/libro/el-surgimiento-de-sendero-luminoso-ayacucho-1969-1979-_106793

DEVIDA. (2023). Perú. Monitoreo de cultivos de coca 2022. DEVIDA.

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. (s. f.). Observatorio de Democracia y Gobernabilidad. Recuperado 5 de noviembre de 2023, de <https://democracia-gobernabilidad.pucp.edu.pe/participación/estallido-social/data>

Galdo Gutiérrez, V. (1992). Ayacucho: Conflictos y pobreza. Historia regional: siglos XVI-XIX. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

García, J. (2013). 2013: La situación del narcotráfico en la región Ayacucho (15; Amenazas a la seguridad: el narcotráfico). IDEI-PUCP.

INEI. (2020). Efectos de la migración interna sobre el crecimiento y estructura demográfica 2012-2017. INEI.

INEI (2024). Perú Evolución de la Pobreza Monetaria 2014 - 2023.

INGEMMET. (2017). Actividad Minera Artesanal en las Regiones de Ayacucho y Huánuco (11; Minería). INGEMMET.

Lu, A. (2021). Ayacucho tiene 15,000 mineros informales y aumentarían si sale la minería formal. Gestión. <https://gestion.pe/economia/ayacucho-tiene-15000-mineros-informales-y-aumentarian-si-sale-la-mineria-formal-noticia/>

Mendoza, M. (2022). La utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana de 2021. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 36, 243-268.

MIDIS. (2024). Reporte regional de indicadores sociales del departamento de Ayacucho. MIDIS.

Muñoz, U. (2015). MINERÍA, CONFLICTO Y COMUNICACIÓN: CASO CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. 2013-2014. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

Olivera, L. (2016). La cooperación internacional en un país de ingreso medio. *Revista Ideele*. <https://www.revistaideele.com/2022/05/26/la-cooperacion-internacional-en-un-pais-de-ingreso-medio/>

Ortiz Huaylla, Z. (2015). La construcción de relaciones de poder en la empresa minera Catalina Huanca: El caso de Raccaya, Canaria - Ayacucho periodo (2012-2014) [Universidad Nacional del Centro del Perú]. <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2399968>

Quinteros, E. (2003). Ayacucho: Transición democrática y la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En L. Huber (Ed.), *Ayacucho: Centralismo y Descentralización*. IEP.

Revilla, C. (2021). De empresario a político: El auge y la caída del gobernador Wilfredo Ocorima en Ayacucho (2010-2018). PUCP.

RPP. (2023). Ayacucho: Estas son las pérdidas económicas que enfrenta la región por los paros | RPP Noticias. RPP. <https://rpp.pe/economia/economia/ayacucho-estas-son-las-perdidas-economicas-que-enfrenta-la-region-por-los-paros-noticia-1459202>

SNI. (2022, noviembre 29). Informalidad en Ayacucho afecta a 9 de cada 10 trabajadores de la región | SNI. <https://sni.org.pe/informalidad-en-ayacucho-afecta-a-9-de-cada-10-trabajadores-de-la-region/>

Tecnología Minera. (2021). Apumayo: «Paralización de la actividad minera implica pérdidas por S/ 5 millones». <https://tecnologiaminer.com/noticia/apumayo-paralizacion-de-la-actividad-minera-implica-perdidas-por-s-5-millones-1636095274>

Vargas, J. (2005). *Como la flor en la rama: Magisterio y política en el Perú*. CLACSO.

Vicuña, J. (2008, febrero 12). Perú: Nadie detiene al paro agrario. *Rel-UITA*. https://www6.rel-uita.org/sindicatos/paro_agrario_peru.htm

Villasante, M. (2021). El racismo: Conceptos y elecciones de 2021 desde la antropología social. IDEHPUCP. <https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/el-racismo-conceptos-y-elecciones-de-2021-desde-la-antropologia-social-24559/>

Yaranga, Y. (2020, diciembre 29). Frentes de defensa del sur de Ayacucho piden presencia del presidente Sagasti en mesa de diálogo. Noticias SER. <https://www.noticiasser.pe/frentes-de-defensa-del-sur-de-ayacucho-piden-presencia-del-presidente>

Zapata, A., Pereyra, N., & Rojas, R. (Eds.). (2008). Historia y cultura de Ayacucho. Instituto de Estudios Peruanos. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qdv81>

Sobre IDEA Internacional

La misión de IDEA Internacional en Perú es fortalecer las instituciones políticas mediante reformas normativas que mejoren la representación de las autoridades electas y la transparencia de los procesos democráticos. Además, brindamos asistencia técnica al ecosistema de instituciones que sustentan el modelo democrático, incluyendo organizaciones políticas, organismos electorales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y redes de activismo, entre otros actores clave. Ofrecemos información y evidencia que permiten evaluar y reflexionar sobre diversos aspectos de la democracia en el país. Buscamos empoderar a la ciudadanía y fomentar una sociedad más informada y comprometida con la vida política del Perú. Por ello, también desarrollamos campañas de información y sensibilización para promover los valores democráticos entre la ciudadanía.

PERÚ CONVERSA es el proyecto en el que se enmarcan estos materiales. Busca fomentar espacios constructivos y plurales de diálogo entre actores políticos y sociales. Tenemos el firme propósito de fomentar soluciones concretas a la crisis política nacional de una manera coherente, inclusiva y pacífica.

PERÚ CONVERSA pone en el centro de la agenda los intereses de la ciudadanía de todo el país, propiciando un clima favorable a los valores democráticos, y sensibilizando a dicha ciudadanía sobre la validez del diálogo como herramienta para el encuentro, especialmente entre personas que piensan diferente.

<<https://www.idea.int>>

PERÚ CONVERSA

